



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO Y SU RELACIÓN CON EL ACTO APROBATORIO DEL PROCESO DE PAZ

“...Cualquiera que declare que se toma en serio los derechos debe aceptar como mínimo la idea de la igualdad, y la idea de la dignidad humana, que supone que hay maneras de tratar a un hombre que son incongruentes con el hecho de reconocerlo cabalmente como miembro de la comunidad humana...”

Ronald Dworkin¹

JOLIE SOFÍA SANABRIA FRANCO^{2,3}

Resumen

El derecho a la libertad religiosa y a la libertad de cultos es un postulado que en el ordenamiento jurídico colombiano se estableció por parte del constituyente derivado como un derecho de categoría fundamental, es un derecho que por su contenido posee una estrecha relación con la libertad de expresión, la libertad de conciencia, con la dignidad humana e incluso con el derecho de asociación, que a lo largo del desarrollo paulatino de la historia ha tenido especial trascendencia con el desarrollo de los seres humanos en la

¹ Cita tomada de: Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, p. 295.

² La presente investigación ha sido realizado por la autora con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos por la Universidad Católica de Colombia, más exactamente por la Facultad de Derecho para optar por el título de Abogada.

³ Estudiante de décimo semestre de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia.
Teléfono: 3204000320, cédula de ciudadanía No. 1.110.480.582, código de estudiante: 2108584, e-mail: jsolfiasanabria@gmail.com; jssanabria84@ucatolica.edu.co. Bogotá D.C. Colombia.

sociedad, pero que adquirió vigencia como derecho humano después de la segunda guerra mundial. Al adquirir valor vinculante en el marco internacional el derecho a la libertad religiosa y de cultos se empezó a constituir como un parámetro en la creación de las cartas políticas de los países, sin embargo algunos países como Colombia tardaron varios años en adecuar el ordenamiento constitucional a los postulados internacionales. Finalmente en el año 1991 dicha adecuación se realizó por lo que a partir de esta histórica fecha el pluralismo religioso, la libertad de expresión y de conciencia adquirieron también fuerza vinculante en el ejercicio de las religiones y cultos.

Metodológicamente la investigación se realizó de manera deductiva por medio del método dogmático y hermenéutico, mediante el análisis del derecho a la libertad religiosa y de cultos de forma desagregada en cada una de sus unidades lingüísticas y como un derecho fundamental del ordenamiento constitucional colombiano y como un derecho humano de acuerdo a lo estipulado en los instrumentos internacionales, finalmente se examinó la desaprobación del acuerdo de paz por parte de seguidores de algunas iglesias católicas y cristianas como una muestra de la práctica eficaz del derecho a la libertad religiosa y de cultos en los procesos de participación democrática. Los resultados de la investigación evidenciaron que la evolución de estos derechos en el ordenamiento jurídico colombiano, está en consonancia con las transformaciones democráticas y jurídicas de la Constitución, y con los requerimientos de organismos internacionales de derechos humanos.

Palabras clave: Derecho, libertad religiosa, libertad de culto, libertad de expresión, dignidad humana, derechos fundamentales.

Abstract

The right to religious freedom and freedom of worship is a postulate that was established in the Colombian legal system by the constituent derivative as a right of fundamental category, is a right that by its content has a close relationship with freedom of expression, freedom of conscience, and with the human dignity and even with the right of association, which throughout the gradual development of history has had special significance to the development of human beings in society, but which has become effective as a human right after the Second World War. When acquiring binding value in the international framework the right to religious freedom and worship began to be a parameter in the creation of the political charts of the countries, however some as Colombia took several years to adapt the constitutional order to the international postulates. Finally in 1991 this adaptation was made so that from this historical date religious pluralism, freedom of expression and conscience also acquired binding force in the exercise of religions and cults.

Methodologically, the research was carried out in a deductive way through the dogmatic and hermeneutical method, through the analysis of the right to religious freedom and worship in a disaggregated way in each of its linguistic units and as a fundamental right of the Colombian constitutional order and as a Human right as stipulated in international instruments, finally examined the disapproval of the peace agreement by followers of some Catholic and Christian churches as a sample of the effective practice of the right to religious freedom and worship in the processes Of democratic participation. The results of the investigation showed that the evolution of these rights in the Colombian legal system is in line with the democratic and legal transformations of the Constitution and with the requirements of international human rights organizations.

Keywords: Law, religious freedom, freedom of worship, freedom of expression, human dignity, fundamental rights.

Introducción

A partir de la Constitución de 1991, el derecho a la libertad religiosa en Colombia se encuadra en el esquema de derechos fundamentales, dentro de este nuevo esquema se reconocen, naturalmente, los derechos humanos de mayor trascendencia política y social, en el marco del Estado social de derecho, los cuales se armonizan con un cúmulo de principios medulares, de arraigo constitucional, como son la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad y la legalidad, entre otros. Todo dentro de una verdadera estructura compleja, que el Estado vela por mantener a través de sus órganos, corporaciones y entidades, mediante el desarrollo de políticas, programas y planes de desarrollo dirigidos a maximizar su reconocimiento y mayor grado de protección. Uno de los derechos fundamentales de mayor avance en el contexto jurídico colombiano y de mayor extensión internacional, es el derecho a la libertad religiosa y de cultos, este derecho tiene conexión directa con otros derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresar o difundir el pensamiento, comprendidos en los artículos 13, 16, 18 y 20 respectivamente.

En efecto, el derecho a profesar libremente una religión y a difundirla, es un derecho humano innato, intransferible e irrenunciable de las personas, que a su vez está regulado por dos sistemas de protección internacional de derechos humanos, uno de carácter universal de la ONU y otro de carácter regional, integrado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Frente a este panorama el derecho a la libertad religiosa y

de culto ha sido desarrollado en Colombia como un derecho fundamental al tenor del artículo 19 de la Constitución Política, y, desde allí, se reconoce toda una diversidad de expresiones religiosas y culturales, estructuradas a través de conglomeraciones, iglesias y confesiones religiosas, en un contexto de igualdad, libertad, autonomía y personería jurídica de la que estas son titulares.

Ahora bien, en el contexto colombiano se realizó el proceso de paz con las FARC, que después de más de cincuenta años de estar en guerra con el Estado colombiano, aceptó la propuesta del Estado a cargo del actual presidente el señor Juan Manuel Santos de sentarse a negociar diversos puntos que son de trascendencia nacional y que por ende atañe a todos los habitantes de Colombia. Para ratificar dicho acuerdo se le solicitó al pueblo colombiano acudir a las urnas para manifestar si estaba o no de acuerdo con lo acordado por el gobierno con el grupo guerrillero por medio de un plebiscito que fue analizado y aprobado por medio del control previo de la Corte Constitucional y que, finalmente fue realizado el domingo dos de octubre de 2016. Luego de la etapa de conteo de votos se dio a conocer a todo el conglomerado social colombiano por medio de los medios de comunicación y de los boletines que iba dando de manera paulatina la Registraduría del Estado Civil, que la decisión que había tomado la mayoría, así fuera por un estrecho margen, era la de no refrendar los acuerdos de paz. Días después, se conoció que gran parte de las personas que habían optado por el no eran seguidores de iglesias en su mayoría cristianas y algunas católicas, por lo que el debate nacional surgió con una oleada de posturas críticas que manifestaban su desacuerdo en el hecho de que las personas hayan tomado dicha decisión teniendo fundamentos de origen religioso. Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende analizar si:

¿La deslegitimación del proceso de paz colombiano realizada por seguidores católicos y cristianos se constituyó como una exteriorización y como una garantía del derecho a la libertad de religión y de cultos o, contrario sensu, es una muestra de la instrumentalización política realizada por medio de discursos populistas y demagógicos en las iglesias?

Para resolver el anterior interrogante será necesario dividir la investigación en tres partes, en el acápite inicial, se presentará al lector como primera medida un análisis del derecho a la libertad religiosa y a la libertad de cultos desde el punto de vista doctrinal en el cual se procederá a descomponer el concepto en cada una de sus unidades lingüísticas, luego se estudiará de forma sistemática y se propondrá una posible definición del derecho a la libertad de religión y de cultos. Posteriormente, en el acápite intermedio se abordará en primer lugar, el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia como un derecho fundamental, se examinará su relación con la dignidad humana, con la libertad de expresión, y con la laicidad del Estado, luego, se procederá a hacer un análisis desde el paradigma del Derecho Internacional y se estudiará la eficacia de la adecuación del sistema colombiano a dichos postulados e instrumentos internacionales. Finalmente, se analizará de forma práctica la libertad de culto y de religión en relación con el plebiscito por la paz colombiano, evento en el cual se resolverá en definitiva el problema jurídico planteado.

1. Análisis doctrinal y sistemático del derecho a la libertad religiosa y de cultos en los sistemas jurídicos

La religión desde la antigüedad y a lo largo de la evolución paulatina de la historia ha sido considerada como un elemento o componente que se encuentra estrechamente ligado a la

humanidad y a la experiencia de la vida individual, social, cultural o histórica. En efecto, los dogmas, la fe y la doctrina – es decir, la enseñanza oficial u ortodoxa de determinado credo – se han constituido en el contexto social como un hecho religioso, por tanto, en un hecho humano de tipo o categoría específica, pues es claro que solo los seres humanos poseen la capacidad racional para decidir de forma libre si profesan o no determinada religión.

En este punto es importante señalar que los seres humanos han sido definidos desde diversas perspectivas, por un lado, el ser humano es desde el punto de vista de la medicina “un ser vivo, operante, dialógico, que surge en el espacio y en el tiempo desde el momento de su concepción, a lo largo de su desarrollo y hasta su muerte, sano, enfermo, aislado y en sociedad” (Agreda, 2000, p. 15). Por otro lado, desde el punto de vista filosófico es considerado como un ente que se encuentra constituido por cuerpo y alma, es por tal motivo que la doctrina especializada en materia filosófica ha explicado que “para Aristóteles, alma es sinónimo de vida, los cuerpos vivos se distinguen de la materia inerte, en el hecho que están animados; el alma es sinónimo de vida, no puede existir sin el cuerpo, ya que esta es su forma” (Blasco & Grimaltos, 2004, p. 23); por otra parte desde el punto de vista gramatical – es decir, desde la perspectiva de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras – la Real Academia Española ha señalado que la palabra ser humano proviene de la lengua de la rama itálica denominada latín en la cual se estableció como *humanus*, y hace referencia a “un ser que tiene naturaleza de hombre racional” (Real Academia Española, 2014).

Comprendido el concepto de ser humano, retomo la idea de que solo los seres humanos – en tanto seres vivos, operantes y racionales – son los que poseen la facultad o mejor, la

aptitud para escoger o elegir determinado credo o creencia religiosa. Dicho proceso de selección efectuado por los individuos, surge o se desarrolla en el ejercicio del principio de libertad, incluso en el de dignidad humana – que serán explicados más adelante – sin embargo resulta bastante trascendental el hecho de que en dicho procedimiento los sujetos exterioricen la necesidad de trascenderse en busca de un algo o un alguien que pueda dar razón o sustento a su existencia – empero, trascendental en sentido positivo pues esta investigación es objetiva e imparcial – que permita generar en su esfera interna niveles mayores de certeza, certidumbre, verdad, seguridad y porque no decirlo, de felicidad y tranquilidad.

Ahora bien, los seres humanos como sujetos pertenecientes a la sociedad, poseen de forma simultánea una relación directa con el Estado y con las normas que fundamentan su existencia y organización, por lo tanto, el modelo normativo de cada Estado se debe adecuar o adaptar de forma dinámica al conjunto de creencias o convicciones que poseen los individuos, que en la práctica se constituyen como los destinatarios de las normas jurídicas. Es por esta razón que en esta parte inicial de la investigación, se presentará al lector como primera medida un análisis del derecho a la libertad religiosa y a la libertad de cultos desde el punto de vista doctrinal en el cual se procederá a descomponer el concepto en cada una de sus unidades lingüísticas, luego se estudiará de forma sistemática.

Como se mencionó anteriormente, el primer asunto o materia a tratar en la presente investigación es el concepto del derecho a la libertad religiosa y a la libertad de cultos desde el punto de vista doctrinal. Como se observa el concepto del derecho a la libertad religiosa y a la libertad de cultos es un concepto compuesto pues se encuentra integrado por un conjunto de unidades lingüísticas, como la palabra derecho, el término libertad, religión

y cultos, por tal motivo resulta necesario e indispensable ahondar primero en cada una de las unidades léxicas, para luego examinar en conjunto el concepto.

En primer lugar, es importante señalar que la palabra derecho, es un término que se puede analizar desde diversas perspectivas, por un lado como una ciencia jurídica en donde el ordenamiento y el sistema jurídico, la justicia y la certeza se constituyen como los ejes fundamentales, y, por otro lado como una facultad, capacidad, o aptitud que poseen los seres humanos dentro del sistema jurídico, en este caso “la palabra derecho se usa indistintamente tanto para indicar la norma jurídica individual como para referirse a un determinado conjunto de normas jurídicas” (Bobbio, 1993, p. 141) por tal motivo, es imperativo diferenciar entre ambas perspectivas para evitar confusiones en la comprensión del tema central objeto de análisis.

El derecho en el ámbito jurídico es un concepto que ha sido ampliamente debatido por los juristas y doctrinantes especializados en filosofía y teoría del derecho por lo cual, son múltiples las posturas y argumentos que sustentan su existencia pero en especial su significado. Inicialmente se ha considerado que el derecho es una ciencia es decir es “un cuerpo de saberes, antes que el conocimiento le importa la objetividad (...) la objetividad de su justificación le permite ser una garantía de verdad para cualquier sujeto que tenga acceso a sus razones” (Villoro, 1996, p. 224) en otras palabras es “una creación humana, un producto social (...) que pretende transformar la realidad (...) es una necesidad social” (Richards, 1987, p. 11).

Ahora bien, el derecho además de ser catalogado como una ciencia ha sido establecido como un sistema complejo de reglas, su mayor influyente es el prestigioso y célebre

filósofo del derecho inglés Herbert Hart; desde el conjunto sistemático de razonamientos expuestos por el mencionado autor, el derecho se funda en un modelo estructurado de disposiciones normativas pertenecientes a un sistema jurídico determinado, que se encuentra contenido por dos grupos de reglas que poseen disimilitudes de forma lógica por la función que cada una cumple dentro del sistema. El primer grupo fue denominado por el filósofo británico como reglas primarias, que básicamente son reglas que “prescriben el comportamiento que es de esperarse por parte de los miembros del grupo en determinadas circunstancias (...) o que facultan o autorizan a estos para llevar a cabo determinadas conductas” (Hart, 2009, p. 79) y el segundo grupo, que se encuentra comprendido por las reglas secundarias que en síntesis son reglas que se constituyen como el “complemento necesario para subsanar ciertos defectos propios de las reglas primarias” (Hart, 2009, p. 80).

Ahora, la palabra derecho desde la perspectiva de las facultades, capacidades, o aptitudes que poseen los seres humanos dentro del sistema jurídico es un término que también ha sido abordado teóricamente desde diversas posturas. Según Alexy la teoría de los derechos presenta dos distinciones que forma en conjunto la base de su argumento, por un lado se encuentra el concepto débil y fuerte de los derechos y por otro lado se encuentra la distinción entre reglas y principios.

En cuanto a la primera distinción el jurista alemán afirma que el concepto fuerte del derecho es en síntesis aquel en donde se consideran como trascendentales todos los elementos del concepto de derecho, en su obra el mencionado autor explica que han sido numerosas las explicaciones proferidas al respecto, sin embargo cita como ejemplo la teoría del célebre y distinguido Jhering – que fue un ilustre jurista alemán, considerado como uno

de los mayores filósofos del Derecho de Europa y de la historia jurídica continental – en la cual se afirma que los derechos son “intereses jurídicamente protegidos” (Alexy, 2006, p. 26) y la teoría de Windscheid en donde se estipula que los derechos son “un poder de voluntad o superioridad de la voluntad que confiere el orden jurídico” (Alexy, 2006, p. 28). Por otra parte, la concepción débil de los derechos básicamente señala que dichas disposiciones son “relaciones jurídicas (...) es una relación normativa entre tres elementos: quien detenta un derecho (a), a quien se dirige el derecho (b), y el contenido del derecho (G). Usando el operador derecho R” (Alexy, 1993, p. 185), de la anterior definición se infiere que la mencionada relación implica una obligación de categoría relativa, pues la prestación es determinable antes de su exigibilidad y cumplimiento, que desde el punto o mejor desde la perspectiva lógica implica una relación conversa en donde, dado el hecho jurídico el pretensor tiene el derecho de observar cierta conducta y, correlativamente el obligado debe asumir la que hace posible el ejercicio y cabal satisfacción de las facultades del pretensor.

Por otra parte, en cuanto a la distinción entre reglas y principios, es necesario comenzar señalando que básicamente es una distinción entre dos tipos de normas – entendidas estas como “enunciados que expresan lo que es obligatorio, prohibido o permitido (...) son enunciados explícitamente o implícitamente normativos que siempre se pueden expresar de forma lingüística” (Sieckmann, 2015, p. 896) – o disposiciones. Por un lado las reglas son normas que “dadas determinadas condiciones ordenan prohíben u otorgan un poder de manera definitiva, así, pueden caracterizarse como mandatos definitivos” (Alexy, 2001, p. 141) y los principios son “normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes (...) por lo tanto son

mandatos de optimización” (Alexy, 1993, p.86). Según Dworkin (1977) los principios son “estándares que han de ser observados por ser una exigencia de justicia, equidad o alguna otra dimensión de la moralidad” (p. 72), es decir son estándares que constituyen la dimensión ética y moral del ordenamiento jurídico. Lo anterior se traduce en el valor normativo que poseen los principios, en donde, “los particulares y las autoridades pueden solicitar su cumplimiento, para así lograr su plena garantía” (Enterría, 1994, p. 16).

Comprendida la primera unidad lingüística del concepto objeto de análisis en la presente investigación es procedente ahora examinar el segundo término, la libertad. Para comenzar es indispensable señalar que la libertad es un término que ha sido ampliamente analizado, desarrollado e interpretado desde diversas perspectivas, como la semántica – es decir, desde su significado como una unidad lingüística – la filosófica, la psicológica y la perspectiva jurídica.

Para comenzar el análisis, se debe tener en cuenta que la palabra libertad desde la perspectiva etimológica – o mejor, desde el punto de vista de su origen o razón de su existencia, de su significación – proviene del latín *libertas*, y hace referencia, según lo determinado por la Real Academia Española – institución cultural encargada de la regularización lingüística del idioma español – a una “facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o a un estado o condición de quien no es esclavo o de quien no está preso” (Real Academia Española, 2014), en otras palabras, es una capacidad o aptitud propia del ser humano, de auto determinarse a actuar en el desarrollo de su vida como considere que es correcto.

Ahora, la palabra libertad desde el panorama psicológico – es decir desde el paradigma del ser humano – se encuentra contenida por un elemento físico – que implica “que su cuerpo no este encadenado, no este categorizado como inferior al de cualquier otro, es una situación en donde no hay una igualdad en lo que concierne al cuerpo humano” (Osho, 2011, p. 3) – por un elemento psicológico en donde “la libertad se manifiesta, cuando el ser humano escoge de forma autónoma, una ideología política, una ideología social o una ideología religiosa, pensado por sí mismo, sin ser forzada su mente en determinado molde” (Osho, 2011, p. 4), que posee una estrecha relación con “el estado de cosas del que parte el individuo, el conjunto de iniciativas compatibles con tal estado de cosas y el acto de voluntad por el que decide elegir alguna” (Geymonat, 1991, p. 33) y, finalmente por un elemento de supremacía que implica “saber que el ser humano no solo es cuerpo, no solo es mente, además de esto, es necesario que el hombre comprenda que es un ser libre por naturaleza” (Osho, 2011, p. 4).

En cuanto a la perspectiva filosófica es importante señalar que esta fue especialmente desarrollada por John Stuart Mill y por Immanuel Kant. John Stuart Mill, fue un filósofo, un político y un economista inglés, considerado como un ilustre representante de la escuela económica clásica y un gran teórico del utilitarismo, en su obra el filósofo británico analiza la libertad desde el paradigma social y político en relación con la acción, en su aporte teórico explica el mencionado autor que:

“la libertad no es un principio último y absoluto, no se basa en el contrato social ni en los derechos naturales (...) es un concepto que ha de ser considerado dependiendo de las consecuencias que tenga sobre la felicidad de los individuos y de la sociedad” (Mill, 2004, p.9).

En ese sentido, “el límite de la libertad individual, se encuentra en las acciones que causen daño a otras personas” (Mill, 2004, p. 26), es decir, si una acción es ejecutada por un sujeto de forma libre, consciente y espontánea, y no causa un daño – o “ alteración negativa de cosas existentes” (Hénao, 1998, p. 35) – a las demás personas que lo rodean en la sociedad, es indispensable que no se reprima ni se reproche su ejercicio de la libertad, pues esto atentaría su nivel de satisfacción personal, su bienestar, su felicidad, su propio juicio y por ende, el principio de utilidad y progreso.

Por otra parte, según Immanuel Kant – filósofo prusiano de la ilustración, considerado como el primero y más importante representante y precursor del idealismo alemán – la libertad, se debe abordar o analizar teniendo como fundamento o sustento la voluntad del ser humano, pues “la voluntad es una especie de causalidad de los seres vivos, en cuanto que son racionales (...) libertad es una propiedad de esta causalidad, por la cual puede ser eficiente, independientemente de extrañas causas que la determinen” (Kant, 2007, p. 71), es decir, la libertad es una propiedad o un elemento de la voluntad, que se fundamenta en la condición racional de los seres humanos y en la razón que estos poseen. Así las cosas, es dable afirmar que en la práctica el ejercicio de la voluntad implica la realización de un proceso racional ejecutado por medio de la razón que finalmente materializa de forma real y efectiva la libertad, en ese sentido “el sujeto atribuye, no a su razón, sino a un impulso, derivado de esta, la determinación del juicio” (Kant, 2007, p. 61), entonces, la libertad, como propiedad de la voluntad, desde esta perspectiva es “el arbitrio, es la independencia de su determinación por impulsos sensibles” (Kant, 1989, p. 17). Al respecto Boladeras (1993) explica que “la idea de la libertad se encuentra inseparablemente unida al concepto

de autonomía, que es un principio universal de la moralidad, que sirve de fundamento a la idea de todas las acciones de seres racionales” (p. 54).

El tercer elemento del concepto complejo del derecho a la libertad de religión y de cultos, es – como se observa – la religión. Este término, al igual que el concepto del derecho y de la libertad es una unidad lingüística que posee múltiples explicaciones teóricas, en primer lugar, según la regularización lingüística realizada por la Real Academia de la Lengua Española palabra religión hace referencia al “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto” (Real Academia Española, 2014), también ha sido definida como “un sistema cultural de comportamientos y prácticas, cosmovisiones, ética y organización social, que relaciona la humanidad a una categoría existencial” (Velasco & García, 2002, p. 89).

El sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim en su obra *Las Formas Elementales de la Vida Religiosa*, explica que la religión es una especie de especulación de todo lo que se escapa de la ciencia – en este punto es imperativo entender el término especulación como reflexión, deducción, meditación o suposición – por tal motivo se ha considerado que las religiones “diametralmente opuestas por sus dogmas, acuerdan reconocer tácitamente que el mundo, con todo lo que contiene y todo lo que le rodea, es un misterio que precisa una explicación” (Durkheim, 2012, p. 22), por su parte Kottak afirma que “es la determinación de la vida humana por el sentimiento de un lazo que une el espíritu humano al espíritu misterioso cuya dominación sobre el mundo y sobre sí mismo reconoce y con el que desea sentirse unido”(2006, p. 67), de lo anteriormente citado es dable señalar que la religión se encuentra constituida por una serie de doctrinas e ideales que de forma simultánea se

componen por principios, creencias y prácticas que son desarrollados y ejecutados por cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural, que por lo general están basadas en textos de carácter sagrado, que unen a sus seguidores en una misma comunidad. Finalmente, el término culto hace referencia al “conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa un homenaje” (Real Academia Española, 2014)

Comprendidos cada uno de los elementos del concepto complejo de derecho a la libertad religiosa y de cultos, es procedente entrar a analizarlo en conjunto por medio de un análisis doctrinal de los diversos autores especialistas en la materia. El derecho a la libertad de cultos ha sido definido como “inmunidad de coacción sobre la persona en materia religiosa, tanto por parte de las personas particulares, como por parte de grupos sociales o de cualquier poder” (Corral, 2003, p. 132) lo que significa que “ninguna persona puede ser forzada a actuar contra su conciencia, ni debe ser impedida de profesar su religión en privado o en público” (Martínez, 1992, p. 118), en otras palabras la libertad de religión es aquella:

“facultad constitucionalmente reconocida y garantizada, que corresponde a todas las personas físicas y jurídicas, de auto determinarse en los actos religiosos, externos, individuales, colectivos o comunitarios, sin ninguna injerencia, coacción o restricción, sea de parte del Estado, sea de otras entidades públicas, sea de parte de los particulares en el marco de la moralidad general y del bien común” (Ramos, 2014, p. 33)

Es imperativo señalar que la noción jurídica de libertad religiosa, también posee una estructura o andamiaje de tipo complejo pues es un concepto que abarca otras disposiciones como la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de asociación y la libertad de confesiones religiosas que por supuesto merecen ser examinadas. En primer lugar la

libertad de conciencia ha sido definida como “la libertad de la persona humana para decidir su postura ante la fe y para vivir internamente, o para manifestar estas posturas o creencias” (Hervada & Zumaquero, 1978, p. 65), por su parte, la libertad de culto hace referencia a “la garantía que consiste en la manifestación externa o ejercicio de las creencias religiosas” (González, 2007, p. 982), según Spector desde la teoría de Raz es en la práctica “el derecho de las comunidades a perseguir su estilo de vida, así como el derecho de los individuos a pertenecer a comunidades respetadas” (1987, p. 58)

La libertad de asociación consiste en la facultad de “unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de las mismas” (Conferencia Internacional del Trabajo, 2008, p. 15) y, por último la libertad de confesiones religiosas es un concepto que comprende “el derecho de toda persona de profesar las creencias que libremente elija o no profesar ninguna, a cambiar de confesión o abandonar la que tenía (...) es una manifestación de la dimensión personal – individual del derecho de libertad religiosa” (Espanya, 1999, p. 62).

En vista de lo anteriormente señalado, es dable concluir esta parte inicial de la investigación señalando que el derecho a la libertad religiosa y de cultos es un postulado normativo en el cual son titulares todas las personas o seres humanos por razón de su existencia humana, en donde, se tiene la facultad de elegir de forma libre la religión o culto que se desee profesar. Este derecho materializa las creencias interiores de los individuos por tanto, no puede ser restringido, no obstante, si puede ser regulado su ejercicio como se examinará a continuación.

2. Régimen jurídico del derecho a la libertad religiosa y de cultos en la legislación colombiana e internacional

En el contexto jurídico colombiano, la libertad religiosa y de cultos es un derecho de raigambre constitucional que fue consagrado de forma expresa en el acto creador de la Constitución Política de 1991 – en el cual se configuró un nuevo modelo de legislación constitucional y de organización del Estado – pues el constituyente derivado, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de sus facultades legislativas considero necesario y pertinente estipular de forma explícita esta disposición pues, la realidad social del país así lo exigía. En efecto, la expedición de la Constitución Política de 1991 generó en el marco del derecho constitucional colombiano un hito sin precedente alguno, pues no solo determinó claramente el conjunto de derechos que serían catalogados como fundamentales, además, se le otorgó especial importancia y relevancia a las minorías – entre ellas las religiosas – en efecto, es desde este importante acontecimiento que se comenzó a reconocer considerablemente en el entorno colombiano que algunos seres humanos poseen una estrecha relación con la denominada dimensión religiosa, que de forma simultánea se configura como un componente fundamental, sustancial y básico de su naturaleza y de su dignidad.

El reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y de cultos significó además, un gran cambio y un importante avance en tratándose de la adecuación del sistema jurídico constitucional colombiano al derecho internacional pues desde el siglo XVIII había sido reconocido y protegido dicho derecho en el ámbito cosmopolita, esta situación sin duda representa una adecuada armonización de los preceptos y postulados constitucionales

nacionales con los internacionales, y por tanto un nivel mayor de eficacia y efectividad de los derechos humanos.

Es por esta razón que en esta parte intermedia de la investigación se abordará en primer lugar el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y de cultos en Colombia como un derecho fundamental, se examinará su relación con la dignidad humana, con la libertad de expresión, y con la laicidad del Estado, luego, se procederá a hacer un análisis desde el paradigma del Derecho Internacional y se finalizará estudiando la eficacia de la adecuación del sistema colombiano a dichos postulados e instrumentos internacionales.

Como se mencionó, en el sistema jurídico colombiano la libertad de religión y de cultos es un derecho de categoría fundamental que fue establecido de forma expresa en el plexo normativo en materia constitucional, es decir, en la Constitución Política de 1991. Dicho catálogo de derechos estipula en su artículo 19 que “se garantiza la libertad de cultos (...) Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva (...) Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), no obstante antes de abordar el contenido el objeto y el núcleo esencial de dicho derecho, es necesario ahondar en el concepto de derechos fundamentales, pues, fue establecido por el constituyente derivado dentro de esta categoría de derechos.

Luigi Ferrajoli – jurista italiano considerado como uno de los principales teóricos del garantismo jurídico – es un prestigioso doctrinante que ha analizado y examinado a fondo el paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales, en su propuesta teórica ha explicado que los derechos fundamentales son “vínculos sustanciales

normativamente impuestos (...) que circunscriben la denominada esfera de lo indecible (...) y que representan un sistema de límites y de vínculos supra ordenados al Estado” (Ferrajoli, 2001, pp. 37-38), es decir, son disposiciones normativas sancionadas en los plexos constitucionales que operan como fuentes de invalidación o deslegitimación, en donde son más que destinatarios, titulares todos los sujetos; son derechos que están igualmente garantizados para todos, que se encuentran sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, que no pueden ser modificados por las mayorías, es decir, se constituyen como derechos contramayoritarios que poseen especial rigidez constitucional, en donde “la previsión de tales derechos por un ordenamiento positivo es la condición de su existencia o su vigencia en ese ordenamiento” (Massini, 2001, p. 230).

El mencionado autor, en otra de sus obras explica al analizar la relación que posee la democracia sustancial con la formal, que los derechos fundamentales “se configuran como otros tantos vínculos sustanciales impuestos a la democracia política: vínculos negativos, generados por los derechos de libertad que ninguna mayoría puede violar; vínculos positivos, generados por los derechos sociales que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer” (Ferrajoli, 2004, p. 24). Como se observa de ambos conceptos de derechos fundamentales presentados por el jurista italiano se desprenden elementos en común, por un lado se encuentra el elemento de universalidad, que en efecto se constituye como una característica definitoria de los derechos fundamentales, pues indica que todos los sujetos, sin importar su origen, raza, sexo son titulares de estos en cuanto personas, ciudadanos o sujetos capaces de obrar, entonces, son universales “porque están atribuidos a todos y en garantía de todos” (Ferrajoli, 2008, p. 218). Desde el paradigma lógico del derecho se infiere que los derechos fundamentales están formulados mediante el cuantificador

universal *todos*, no obstante, el ejercicio de algunos derechos fundamentales se encuentran limitados en ocasiones a la capacidad de obrar, como en el caso del ejercicio de la soberanía de forma directa por parte de los ciudadanos mayores de edad.

Otro elemento común de ambas definiciones es la indisponibilidad de los derechos fundamentales, que implica que estén sustraídos tanto de las decisiones políticas como de las operaciones del mercado, Ferrajoli al respecto explica que el elemento de indisponibilidad se ejecuta o desarrolla de dos maneras:

“En virtud de su indisponibilidad activa, no son alienables por el sujeto que es su titular: no puedo vender mi libertad personal o mi derecho de sufragio y menos aún mi propia autonomía contractual (...) Debido a su indisponibilidad pasiva, no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad o de mis derechos de autonomía” (Ferrajoli, 2004, p. 47)

Al respecto, es importante tener en cuenta que la Declaración Universal de Derechos Humanos – adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 – determinó en su plexo que los derechos fundamentales se dividen en dos grandes grupos, por un lado se encuentran los derechos de la persona o derechos de la personalidad y, por otro lado se encuentran los derechos del ciudadano. Ambas categorías poseen la misma estructura sin embargo, se diferencian en que los derechos de la persona “son los derechos de los que son titulares todos en cuanto personas naturales” (Ferrajoli, 2011, p. 691), y, los derechos del ciudadano son “los derechos de los que son titulares todos en cuanto ciudadanos (...) se trata de derechos – potestad, en cuanto además capaces de obrar” (Ferrajoli, 2011, p. 692).

En conclusión, los derechos fundamentales son normas téticas constituidas como “derechos singulares que adquiere cada individuo con exclusión de los demás, son universales, indispensables, inalienables atribuidos por normas jurídicas a todos en cuanto personas, ciudadanos o capaces de obrar dentro de un Estado” (Ferrajoli, 2011, p. 236).

Comprendido el concepto de derechos fundamentales, es procedente entrar a analizar a fondo el concepto de la libertad religiosa y de cultos como derecho de categoría fundamental en el sistema jurídico colombiano. Como se anotó de forma previa dicho derecho fue estipulado en el artículo 19 de la norma superior, en dicha disposición se enuncia básicamente que en el contexto colombiano el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la libertad de cultos, por tanto, todas las personas tienen la facultad de profesar libremente su religión, situación que implica difundirla de cualquier forma en forma individual o colectiva. Al respecto, es importante señalar que el establecimiento del derecho a la libertad religiosa y de cultos en la Carta Política de 1991 generó un cambio de orden cualitativo y de grado en el tratamiento de los aspectos o temas de categoría religiosa dentro del constitucionalismo colombiano, pues la Constitución Política de 1886 establecía en el contenido de su plexo normativo la práctica religiosa mayoritaria, es decir, una religión oficial en el contexto colombiano, la católica. Esta situación sin duda le daba un mayor nivel de preferencia a la religión católica sobre otros credos, pues si bien dicha norma superior toleraba otras religiones, estas se encontraban supeditadas a los postulados católicos, impidiéndose su real y efectivo ejercicio. Empero, la Constitución de 1886 si establecía una especie de cláusula de tolerancia religiosa que, conforme el artículo 53 de esa codificación, garantizaba la libertad de todos los cultos que “no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del

orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común” (Consejo Nacional Constituyente, 1886), pero en la práctica las otras expresiones religiosas no podían mostrarse incompatibles con el culto mayoritario.

Es por esta razón que con la expedición de la Constitución Política de 1991 se generó en el contexto jurídico constitucional colombiano un significativo cambio de orden cualitativo sobre la materia, que reposa en tres aspectos principales:

“se eliminó la referencia a un ser sobrenatural como sustento del principio de soberanía y, en cambio, se hizo una referencia en el Preámbulo a la invocación de la protección de Dios, lo cual es una opción diametralmente opuesta a justificar el fundamento del poder político en esa instancia trascendente que, además, no fue vinculada a ningún credo particular, como sí sucedía al amparo del régimen anterior” (Corte Constitucional, 2011)

Adicionalmente, se estableció en la definición del Estado colombiano – artículo 1º C.P – la cláusula democrática, participativa y pluralista, que sin duda posee una especial relación con el contenido y alcance del principio de pluralismo religioso, en el cual es imperativo asumir y promover que en la sociedad concurren diversos modos de comprender la ética, la moral y, en general, distintos escenarios axiológicos, todos ellos igualmente válidos y con ningún otro límite que la vigencia de los derechos fundamentales.

Es por esta razón que en el ordenamiento jurídico colombiano existe un mandato constitucional concreto que impide el Estado otorgue un tratamiento preferente a un credo particular, sin embargo, es necesario tener en cuenta que el origen de dicho establecimiento o mejor, la razón que motivó al Constituyente a crear un nuevo paradigma o modo en el que el Estado aborda las cuestiones religiosas, surgió de la propuesta teórica realizada por el filósofo del Derecho y catedrático de derecho constitucional norteamericano Ronald

Dworkin, en donde explica que las sociedades democráticas en relación con el aspecto religioso se manifiestan de dos formas, la tolerante y la secular en ese sentido existen:

“las sociedades religiosas tolerantes, las cuales consideran que la práctica religiosa, en sí misma considerada, debe ser objeto de protección estatal, pero que admiten que la misma se exprese a través de diversos credos o, inclusive, que tolera que los ciudadanos no profesen ninguno; y las sociedades seculares, que aceptan la práctica religiosa de los ciudadanos, o la negativa a ella, pero no por el hecho que consideren que las religiones son un ámbito constitucionalmente protegido por sí mismo, sino en tanto tales prácticas hacen parte de la autonomía del individuo, quien puede optar por cualquier tipo de parámetro ético o moral para guiar su conducta, incluso uno de carácter trascendente o religioso” (Dworkin, 2006, p. 52)

En ese orden de ideas, inicialmente se instauró en el contexto colombiano un modelo de Estado secular, en donde el establecimiento de la libertad de conciencia se constituye como uno de los aspectos fundamentales, situación que se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva. Sin embargo, dicho establecimiento luego fue modificado al interior de la Asamblea Nacional Constituyente, pues finalmente se decidió optar por un modelo de Estado laico, según la delegataria María Mercedes Carranza, esta decisión tuvo sustento en la idea de que “la Constitución debe ser pluralista y permitir la participación de todas las religiones (...) establecer preferencias corresponde al esquema de un estado confesional, y los colombianos desean pluralismo religioso y político” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, p. 3)

En vista de lo anteriormente señalado, es dable afirmar que la Constitución Política de 1991 le otorgó igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que éstas tengan, es decir, se estableció la igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con la finalidad exclusiva de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas.

Ahora bien, dicho establecimiento del derecho a la libertad religiosa y de cultos en el ordenamiento jurídico colombiano también generó la adecuación del sistema colombiano al paradigma del Derecho Internacional y al modelo de los derechos humanos en donde ya había sido establecido el derecho objeto de análisis desde el siglo XVIII. Para abordar la mencionada adecuación del sistema normativo colombiano al Derecho Internacional es necesario primero comprender el concepto de los derechos humanos.

Los derechos humanos, poseen especial conexión con los derechos fundamentales sin embargo son dos conceptos diferentes, estos hacen parte del ámbito internacional y son concebidos como aquellos “derechos universales e indisponibles establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en los pactos internacionales de 1966 y demás convenciones internacionales sobre derechos humanos” (Ferrajoli, 2008, p. 43), adicionalmente son aquellos derechos que “tienen un contenido exclusivamente moral pero su forma es positiva, penables mediante sanciones estatales, son especificados caso a caso por medio de la jurisdicción” (Habermas, 2012, p. 22), son derechos que le pertenecen a todas las personas por el simple hecho de su existencia humana, son “los derechos primarios de la persona” (Ferrajoli, 2011, p. 697)

Como explica Ferrajoli, los derechos humanos aparecieron por primera vez en el ámbito internacional en la Declaración de los Derechos humanos de 1948 en la cual se estipula en el artículo primero que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Naciones Unidas, 1948, p. 1), dicho establecimiento surgió luego de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta a los crímenes atroces cometidos en el Holocausto Nazi en donde el autoritarismo político, la discriminación racial y étnica fueron determinantes en el movimiento por los derechos humanos.

Comprendido lo anterior, retomo la idea antes mencionada en la cual se afirmó que la libertad religiosa desde el modelo del derecho internacional es un tópico que ha sido profundamente analizado desde el siglo XVIII. En efecto, desde la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de Massachusetts de 1780, se concibió el derecho a libertad religiosa como aquel que tiene todo hombre por razón de su existencia humana, en donde el reconocimiento del pluralismo cristiano, el ejercicio del derecho dentro de la paz y orden público son considerados como factores determinantes para lograr su real y eficaz ejercicio, así las cosas, dentro del mencionado estatuto se determinó que:

“La religión, es decir el deber que tenemos hacia nuestro Creador, y la manera de realizarlo, debe orientarse exclusivamente por la razón y la convicción, no por la fuerza y la violencia; y, por tanto, todos los hombres tienen el mismo derecho al ejercicio libre de la religión de acuerdo a los dictados de su conciencia; es deber mutuo de todos practicar hacia los demás la clemencia, el amor y la caridad cristianas” (Lozano, 1995, p. 31).

Posteriormente, surgieron las denominadas Declaraciones modernas, según Prieto (2011) son tres los textos pilares en el ámbito internacional, que recogen el derecho a la libertad

religiosa y de cultos “la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 12” (p. 81) .

En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 – que fue un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948 en París – al referirse a la libertad de conciencia y de religión, expresa en el artículo 18 que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica el culto y la observancia” (Naciones Unidas, 1948)

En segundo lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18 señala que:

“...Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o sus creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza (...) Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección (...) La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden

y la moral públicos, o derechos y libertades fundamentales de los demás...” (Naciones Unidas, 1966)

De ello puede inferirse que las Naciones Unidas siguió la línea argumental de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin embargo, incluyó en la categorización del derecho a la libertad de tener una religión, la inmunidad de coacción en el ejercicio del mismo y “adoptó como compromiso de los Estados el respeto a la libertad de los padres de elegir la enseñanza religiosa de sus hijos” (Pallares, 2004, p. 15).

En tercer lugar, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos – considerada como una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos – también denominada como Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 12, dispone de forma expresa que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado (...) Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias (...) La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás” (Organización de los Estados Americanos, 1969)

De ahí surge la idea de que el derecho a la libertad religiosa y de cultos, no debe ser solamente considerado como un derecho humano, es además una obligación a cargo de los

Estados que posee una relación directa con la salvaguarda de la libertad de pensamiento y de expresión.

Así, es dable llegar a la conclusión de que en el ordenamiento jurídico colombiano el constituyente derivado – o Asamblea Nacional Constituyente – realizó una adecuación dinámica de los postulados nacionales al conjunto de instrumentos internacionales creados en materia de libertad de religión y cultos, situación que sin duda desde el paradigma jurídico marcó un importante progreso del constitucionalismo colombiano pues se constituyó como un sistema artificial de garantías de los derechos humanos “que es el rasgo específico del Estado Constitucional de Derecho” (Ferrajoli, 2004, p. 19). En efecto, el derecho internacional desde su perspectiva axiológica establece una serie de vínculos y límites jurídicos en la producción normativa, que implica que los Estados acaten los postulados establecidos en los instrumentos internacionales – previamente analizados – adecuando sus normas constitucionales a estos. Según el ilustre jurista italiano Ferrajoli a esta situación se le denomina “creación de derecho sobre derecho en donde se analiza la regulación jurídica del derecho positivo mismo, no sólo en cuanto a las formas de producción sino también por lo que se refiere a los contenidos producidos” (2004, p. 22), es decir, la producción normativa en materia constitucional no solo es condicionante, además es condicionada por vínculos jurídicos formales y sustanciales que son dados por el derecho internacional.

3. La libertad de culto y de religión en relación con el plebiscito por la paz colombiano: Análisis práctico.

Colombia ha sido un país tradicionalmente católico, es decir, delineado históricamente en su desarrollo sociopolítico a partir de los principios y valores del catolicismo, sin embargo

con el aumento progresivo de confesiones religiosas de tradición cristiana no católica y, tras la promulgación de la Constitución de 1991, dicho modelo confesional sufrió un cambio trascendental pues se empezó a considerar que el Estado colombiano era laico, por tanto el pluralismo y la prevalencia de la libertad y de la dignidad humana se erigieron como elementos estructurales en los asuntos religiosos.

A raíz de lo anteriormente señalado minorías religiosas como las cristianas – actualmente con gran fuerza nacional – empezaron a desarrollar diversos mecanismos de fortalecimiento de su reconocimiento social, mediante la construcción de espacios políticos propios, como la conformación de movimientos y partidos políticos, en donde la finalidad es que líderes o personas que profesan la religión cristiana ocupen cargos de elección popular a nivel local, regional y nacional, situación que sin duda representa el ejercicio pleno y eficaz del derecho de asociación y la libertad de religión y de cultos establecidos en el plexo normativo en materia constitucional.

Contemporáneamente, estas formas emergentes de participación política han tomado un papel activo en la democracia colombiana, como en el caso del plebiscito del proceso de paz – el cual pretendía que el pueblo se expresara acerca de la aprobación o desaprobación del acuerdo suscrito con las FARC – pues fue de público conocimiento que gran parte de los votantes por el “NO” eran seguidores, feligreses y líderes de la religión cristiana. Sin embargo, esto no se sale del marco jurídico, por el contrario resulta ser conforme a derecho y se constituye como una garantía del derecho de expresión, que conexo con la libertad de religión y de cultos materializan la dignidad humana.

Si bien uno de los argumentos de los líderes de iglesias cristianas era: “el acuerdo vulnera algunos principios evangélicos (...) la familia, por ejemplo, cuando se habla de equilibrar los valores de la mujer con los de los grupos LGTBI” (Cosoy, 2016), que sin duda resulta ser un poco controversial, no autoriza por ningún motivo a exteriorizar juicios de reproche señalando que es fruto de un proceso demagógico basado en mentiras y posturas ideológicas contrarias a la Constitución, pues es indispensable que de forma previa se conozca la cosmovisión que se posee dentro de dichas organizaciones, así como los principios religiosos que las gobiernan.

En efecto, es una cuestión de respeto por los derechos de las demás personas, respeto por la libertad de expresión, la libertad de conciencia que en conjunto materializan el derecho a la libertad religiosa y de cultos, pues como se explicó y analizó en el acápite anterior en el contexto colombiano – luego de un proceso de adecuación y armonización de los postulados nacionales con los internacionales – la libertad religiosa posee una estrecha relación con la libertad de profesar cualquier creencia religiosa independiente y autónomamente escogida, que de forma simultánea implica el ejercicio de la libertad de expresión en donde los sujetos se encuentran facultados para exteriorizar de diversas maneras su opinión ante prácticas que consideren que atenten contra su creencia religiosa, como lo sucedido en el acto refrendatorio del proceso de paz, en donde gran parte de los que votaron por el “NO” eran cristianos.

Esta situación se constituye no solo como una garantía de los procesos democráticos realizados en el contexto colombiano, además es una garantía del derecho fundamental de religión pues a la luz de la actual Constitución, los sujetos no pueden ser obligados a actuar contra su creer y sentir, adicionalmente ninguna persona puede impedirle a otra obrar de

acuerdo con sus creencias y sentimientos más cuando se trata de hacer efectivo el postulado constitucional de soberanía directa y la participación ciudadana, pues lo religioso no es un valor accesorio, sino esencial de la persona.

Para concluir, es necesario tener en cuenta lo estipulado por el alto tribunal en materia constitucional en su jurisprudencia, en la cual se señala que para algunas confesiones religiosas la libertad en los procesos de participación ciudadana puede ser entendida como aquella en la que:

“todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares, como por parte de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en lo religioso, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos” (Corte Constitucional, 1999)

Conclusiones

1. La forma en que los Estados resuelven su relación con los diferentes credos religiosos responde a una categorización, que se ejecuta entre la asunción de un credo particular como propio de la Nación, hasta el carácter laico y secular de la organización política.
2. La Constitución Política de 1991 contiene un importante cambio cualitativo en materia de libertad religiosa, pues eliminó la referencia a un ser sobrenatural como sustento del principio de soberanía y, en cambio, hace una referencia en el Preámbulo a la invocación de la protección de Dios, lo cual es una opción

diametralmente opuesta a justificar el fundamento del poder político en esa instancia trascendente.

3. La Constitución Política de 1991 asume y promueve el hecho de que en la sociedad concurren diversos modos de comprender la ética, la moral y, en general, distintos escenarios axiológicos, todos ellos igualmente válidos y con ningún otro límite que la vigencia de los derechos fundamentales.
4. Dentro del nuevo ordenamiento constitucional colombiano la consagración de la libertad de conciencia representa uno de los aspectos fundamentales. Ello se complementa con el derecho de cada persona de profesar libremente su religión en forma individual o colectiva.
5. El principio de pluralismo religioso, aunque está estrechamente vinculado con el concepto de Estado laico, tiene un contenido y alcance concreto. De acuerdo con esa garantía constitucional, al igual que el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad religiosa, las diferentes creencias religiosas tienen idéntico reconocimiento y protección por parte del Estado.
6. El discurso de carácter religioso, es decir, aquel que se produce dentro de una determinada confesión religiosa, por parte de representantes o autoridades de la misma o de sus integrantes, con base en los dogmas y documentos sagrados respectivos, se encuentra protegido no solamente por el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto sino, también, por la libertad de expresión.

7. La libertad de expresar, por medio de actos de habla, la específica visión del mundo en la que un determinado grupo religioso se fundamenta y, conforme a ella, calificar los hechos del mundo y la conducta de las personas, pertenezcan éstas o no al grupo, así como la determinación de la conducta de los fieles a partir de los postulados dogmáticos, constituye un derecho que dimana de la libertad religiosa y de culto y de la libertad de expresión.
8. Es posible afirmar que, *prima facie*, la Carta Política colombiana, no pretende intervenir en la definición del contenido, el curso y la forma que haya de adoptar el discurso de las distintas iglesias, grupos y credos religiosos.
9. El ejercicio de divulgación y transmisión de los fundamentos y principios de determinada religión, y el comportamiento que sus miembros deseen adoptar siendo fieles a un determinado paradigma de vida, se realiza por medio de un juicio de discernimiento interno que implica el ejercicio real y efectivo de profesar libremente una religión y a difundirla en forma individual y colectiva.
10. El ejercicio del derecho de la libertad religiosa y de cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública.
11. La libertad de expresión en general y la libertad de expresión religiosa, en particular, reúnen la doble condición de derechos esenciales de todo orden jurídico democrático.

REFERENCIAS

- Agreda, V. S. (2000). Manual de embriología y anatomía general. España: Servei de Publicacions.
- Alexy, R. (1993). *Teoría de los derechos fundamentales*. (E. G. Valdés, Trad.) Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales.
- Alexy, R. (2001). *Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica*. Alicante: Cuadernos de Filosofía del Derecho.
- Alexy, R. (2006). *Derecho y Razón Práctica*. México: Fontamara.
- Asamblea Nacional Constituyente. (24 de abril de 1991). Comisión Primera, Intervención del delegatario María Mercedes Carranza Coronado. *Gaceta Constitucional* (130).
- Asamblea Nacional Constituyente. (10 de Octubre de 1991). Constitución Política de Colombia. *Gaceta Constitucional* (114).
- Blasco, J., & Grimaltos, T. (2004). *Teoría del conocimiento*. (L. Juan, Trad.) Madrid: Universidad de Valencia.
- Bobbio, N. (1993). *Teoría General del Derecho*. (E. R. Acuña, Trad.) España: Debate.
- Boladeras, M. (1993). *Libertad y tolerancia: éticas para sociedades abiertas*. Barcelona: Publicaciones de la Universidad de Barcelona.
- Conferencia Internacional del Trabajo. (2008). *La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica*. Ginebra: International Labour Organization.

Consejo Nacional Constituyente. (7 de Agosto de 1886). Constitución Política. *Diario Oficial, XXLL* (6758-6759), págs. 801-900.

Corral, S. (2003). *La relación entre la iglesia y la comunidad política*. Madrid: B.A.C.

Corte Constitucional. (1999). *Sentencia T - 430, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara*. Bogotá.

Corte Constitucional. (2011). *Sentencia C - 817, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva*. Bogotá.

Cosoy, N. (5 de octubre de 2016). *El rol de las iglesias cristianas evangélicas en la victoria del "No" en el plebiscito de Colombia*. Recuperado el 20 de febrero de 2017, de BBC: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37560320>

Durkheim, É. (2012). *Las formas elementales de la vida religiosa*. México: Fondo de Cultura Económica.

Dworkin, R. (1977). *Los Derechos en Serio*. (M. Guastavino, Trad.) Madrid: Ariel Derecho.

Dworkin, R. (2006). *¿Es posible la democracia aquí? Principios para un nuevo debate político*. (G. Carrio, Trad.) Nueva Jersey: Princeton University Press.

Enterria, E. G. (1994). *La Constitución como norma jurídica y el tribunal constitucional*. Madrid: Civitas.

Espanya, M. (1999). *La libertad religiosa en España a los veinte años de su Ley orgánica*. España: Dirección General de Asuntos Religiosos.

- Ferrajoli, L. (2001). *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2004). *Derechos y Garantías, La Ley del más débil*. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2008). *Democracia y garantismo*. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2011). *Principia Iuris*. Madrid: Trotta.
- Geymonat, L. (1991). *La Libertad*. Barcelona: Rusconi Critica.
- González, M. (2007). Libertad de culto. En *Enciclopedia Jurídica Mexicana*. México: Porrúa - Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM.
- Habermas, J. (2012). *La Constitución de Europa*. Madrid: Trotta.
- Hart, H. (2009). *El concepto del derecho*. (G. Carrió, Trad.) Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Henao, J. C. (1998). *El daño* (1º ed.). Bogotá: Universidad Externado.
- Hervada, J., & Zumaquero, J. (1978). *Textos Internacionales de derechos humanos*. España: Universidad de Navarra.
- Kant, M. (2007). *Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres*. (P. R. Barbosa, Ed., & M. G. Morente, Trad.) San Juan , Puerto Rico : Creative Commons.
- Kottak, C. (2006). *Antropología Cultural*. Madrid: McGraw Hill.
- Lozano, C. (1995). *Persona y Religión y Estado*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Martínez, D. (1992). *Interpretaciones de la Constitución y de la libertad religiosa. El Derecho eclesiástico del Estado*. Madrid: Marcial Pons.

- Massini, C. (2001). El fundamento de los derechos humanos en la propuesta positivista-relativista de Luigi Ferrajoli. *Persona y Derecho* (61), 227-247.
- Mill, J. S. (2004). *Sobre la libertad*. (G. Cantera, Trad.) Madrid, España: EDAF.
- Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. *Resolución 217 A, (III)*.
- Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. *Resolución 2200 A (XXI)*.
- Naranjo, V. (1995). *Curso de Historia Constitucional Colombiana*. Bogotá: Ibáñez .
- Organización de los Estados Americanos. (7-22 de noviembre de 1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)*. Recuperado el 24 de febrero de 2017, de Departamento de Derecho Internacional. Secretaría de Asuntos Jurídicos: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
- Osho. (2011). *Libertad: La valentía de ser tú mismo*. España: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Pallares, J. (2004). *Derecho internacional Público* (2da ed.). Bogotá: Leyer.
- Prieto, V. (2011). *Estado Laico y Libertad Religiosa: Antecedentes y Desarrollos de la Constitución de 1991*. Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike.

- Ramos, F. (2014). *Derecho fundamental de libertad religiosa en el ordenamiento constitucional y jurisprudencial de la República de Colombia: análisis histórico y régimen jurídico* (Vol. 4). Madrid: San Dámaso.
- Real Academia Española. (17 de Octubre de 2014). *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed. Madrid. Recuperado el 16 de febrero de 2017, de <http://dle.rae.es/?id=0oKpOJX>
- Richards, S. (1987). *Filosofía y Sociología de la Ciencia*. México: Siglo XXI.
- Serrano, W. (20 de septiembre de 2016). *Los pastores cristianos que promueven el No en el plebiscito*. Recuperado el 20 de febrero de 2017, de Las 2 orillas: <https://www.las2orillas.co/los-pastores-cristianos-que-incitan-el-no-en-el-plebiscito/>
- Sieckmann, J. (2015). Norma Jurídica. En J. L. Fabra Zamora, & V. Rodríguez Blanco, *Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho* (págs. 895-845). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Spector, H. (1987). Liberalismo, perfeccionismo y comunitarismo. Examen crítico y comparativo de la posición del profesor Raz. *Anuario de Filosofía Jurídica y Social*, 7, 57-76.
- Uribe, D. (1985). *Las Constituciones de Colombia, perspectiva histórica y sociológica* (Vol. I). Madrid: Cultura Hispánica – Instituto de Cooperación Iberoamericana.
- Velasco, F., & García, F. (2002). El estudio de la religión. En *Enciclopedia Iberoamericana de Religiones*. Madrid: Trotta.
- Villoro, L. (1996). *Crecer, saber, conocer*. México: Siglo XXI.